




La CHJ pasa de examinar 6 planes urbanísticos a 757 en cuatro años

LAURA BALLESTER

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha pasado en sólo cuatro años de tener que informar sobre seis actuaciones urbanísticas en 2002 a las 757 solicitudes de informes que ha recibido en 2006 para que determinara la disponibilidad de agua o el riesgo de inundabilidad de las actuaciones urbanísticas. La progresión es una buena muestra de la avalancha de planes urbanísticos presentados en los últimos años, a pesar de que algunos funcionarios y promotores consideren que son los medios de comunicación quienes construyen esta «realidad virtual». El incremento en este tipo de informes se produjo a partir de 2004. Desde la CHJ lo atribuyen a «la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje» (Lotpp). Ese año también fue el de los varapalos europeos (del Parlamento y de la Comisión) a la política urbanística del Consell, que aceleraron la aprobación de la Ley Urbanística Valenciana (LUV). El efecto llamada no se hizo esperar y la CHJ recibió un total de 692 planes urbanísticos a lo largo de 2005. En 2006 se han contabilizado 757 expedientes, la mayoría presentados a principios de año para evitar la entrada en vigor de la LUV el 1 de febrero pasado.



El socialista Francesc Signes

Servicios		
	Enviar esta página	
	Imprimir esta página	
	Atención al lector	
Anterior	Volver	Siguiente

Como ayer apuntó este diario, muchos de estos informes acaban en un cajón, ya que los ayuntamientos y promotores recurren al informe de disponibilidad de agua de la empresa gestora local en el caso de que el de la CHJ sea desfavorable, porque así se lo permite la legislación. Por eso, el PSPV presentará dos enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que permitan modificar la Lotpp y la LUV para que los informes de organismos de cuenca sean vinculantes.

El secretario de Medio Ambiente de los socialistas, Francesc Signes, añadió ayer que no sólo la UE y los ciudadanos «questionan las prácticas urbanísticas de Camps», sino que ahora también lo hace la justicia, aludiendo al caso de Parcent. Según dijo, es «es claramente sintomático el silencio al respecto» del Consell acerca de este «inicio del desmoronamiento del modelo urbanístico valenciano propiciado por el PP». El responsable exigió «un urbanismo para los ciudadanos y no para los especuladores».